ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

COMUNICADOS DE PRENSA

No. 17/93

El lunes 6 de septiembre de 1993 se inicia la visita *in loco* que, con la anuencia del Gobierno de Guatemala, realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de observar la situación general de los derechos humanos en este país. La visita se extenderá hasta el viernes 10 de septiembre y participan en ella el Dr. Oscar Luján Fappiano, Presidente de la Comisión, Profesor Michael Reisman y Dr. Alvaro Tirado Mejía, Primer y Segundo Vicepresidentes de la Comisión, el Dr. Marco Tulio Bruni Celli, el Embajador Oliver Jackman y el Dr. Leo Valladares Lanza.

La Comisión estará asistida durante su visita por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión, Dra. Edith Márquez Rodríguez, el Dr. David Padilla, y el Dr. Osvaldo Kreimer. Asimismo, contará con el apoyo administrativo de las señoras Gabriela Hageman y Gloria Hansen.

Durante su observación *in loco*, la CIDH se entrevistará con autoridades del Gobierno y de instituciones oficiales, con representantes de organismos de defensa y promoción de los derechos humanos, con personas y miembros de instituciones representativas y con quienes consideren que hayan sido afectados en sus derechos humanos y deseen presentar denuncias ante la Comisión. Con el objeto de que estas personas puedan realizar dichas denuncias, la CIDH las recibirá en su salón de audiencias en el Hotel Princess del 6 al 9 de septiembre entre las 10 a.m. a 12 m. y de 3 a 5 p.m.

La Comisión se trasladará al interior del país, a las llamadas Comunidades de Poblaciones en Resistencia (CPR) en el Departamento de El Quiché.

La visita de la CIDH se realiza en el marco de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional del cual es parte el Estado guatemalteco, y de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto y Reglamento de la Comisión. De acuerdo con dichos instrumentos, el Gobierno de Guatemala se ha comprometido a otorgar todas las garantías a las personas, grupos, entidades y facilidades que ésta requiera para cumplir con su tarea de observar la situación general de los derechos humanos en el país (artículos 58 y 59 del Reglamento de la Comisión).

Al término de la visita, la Comisión convocará a una conferencia de prensa en el Hotel Princess el día viernes 10 de septiembre en horas de la tarde.

Ciudad de Guatemala, 5 de septiembre de 1993.

No. 18/93

El día de hoy, 10 de septiembre de 1993, finaliza la visita que, por invitación del Gobierno de Guatemala, ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de observar la situación de tales derechos en el país. La Comisión estuvo integrada por el Dr. Oscar Luján Fappiano, Presidente; Prof. Michael Reisman y Dr. Alvaro Tirado Mejía, Primer y Segundo Vicepresidentes respectivamente, y por los miembros, Dr. Marco Tulio Bruni Celli, Embajador Oliver Jackman y Dr. Leo Valladares. La Comisión estuvo asistida durante su visita por la Secretaria Ejecutiva, Dra. Edith Márquez Rodríguez, por el Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David J. Padilla y por el abogado de la Secretaría, Dr. Osvaldo Kreimer. Asimismo, contó con el apoyo administrativo de las señoras Gabriela Hageman y Gloria Hansen.

La Comisión Interamericana se reunió con el señor Presidente de la República, Lic. Ramiro de León Carpio; el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Lic. Arturo Fajardo Maldonado; el señor Ministro de Gobernación, Lic. Arnoldo Ortiz Moscoso; el señor Presidente de la Corte de Constitucionalidad, Lic. Epaminondas González; el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lic. Juan José Rodil Peralta; el señor Ministro de la Defensa Nacional, General Mario Enríquez Morales; el señor Procurador de los Derechos Humanos, Dr. Jorge Mario García Laguardia; el señor Procurador General en funciones, Lic. Edgar Tuna Valladares; el señor Presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), Lic. Jorge Cabrera Hurtarte; con los señores Directivos de la Comisión de Refugiados y Desplazados (CEAR), Fondo Nacional de la Paz (FONAPAZ), Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA); el señor Director

General de la Policía Nacional, Lic. Mario René Cifuentes Echeverría; el señor Rector de la Universidad de San Carlos, Dr. Alfonso Fuentes Soria; el señor Presidente de la Comisión Coordinadora para la Paz, Dr. Héctor Rosada; y con una Comisión especial de la Instancia Nacional de Consenso.

Durante su permanencia en Guatemala, la Comisión se reunió con instituciones y organizaciones de derechos humanos. Recibió, asimismo, a personas y miembros de instituciones representativas de la sociedad guatemalteca, grupos religiosos, campesinos, indígenas, refugiados, desplazados, retornados, sindicales, estudiantes, Comunidades de Población en Resistencia (CPRs), y otros.

Igualmente se recibieron testimonios y denuncias de personas y grupos que plantearon alegadas violaciones a sus derechos humanos, las que serán oportunamente tramitadas de acuerdo con las normas convencionales y reglamentarias que rigen los trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión se trasladó al interior del país, a zonas de los departamentos de El Quiché y Huehuetenango, en las cuales tuvo la oportunidad de reunirse con las autoridades, organizaciones, miembros de las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil (C.V.A.C.), instalaciones militares y personas naturales interesadas en plantear su situación y apreciaciones respecto al contexto de los derechos humanos en su región. En Huehuetenango visitó Colotenango y comunidades vecinas, entre ellas, la Cumbre y Granadillos; en El Quiché, visitó Santa Cruz de El Quiché, San Pedro Jocopilas, y en las zonas de Ixcán, Polígono Catorce y Playa Grande.

La Comisión como resultado de la visita de observación que realizó al país en noviembre pasado, redactó y publicó el "Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos", que cubrió el período comprendido entre el año 1991 a marzo de 1993. Dicho Informe ha tenido una amplia difusión en el país. Con esta visita, la Comisión ha podido constatar la situación que ha vivido Guatemala a partir de ese período, de la cual dará cuenta en su próximo informe.

La Comisión percibe que, desde junio pasado, el Gobierno ha dado pasos iniciales en el mejoramiento de algunos de los problemas que señalara en su Cuarto Informe: la afirmación de la jurisdicción civil y del Ministerio de Gobierno sobre problemas de refugiados o de violaciones realizadas por las PACs, la diferenciación entre las tareas de la policía y la militar, con la asunción de autoridades civiles en la Policía Nacional y la vuelta a sus actividades específicas de los oficiales militares que allí actuaban; las instrucciones emitidas por el Ministerio de Gobernación de que todo allanamiento domiciliario debe hacerse con la correspondiente orden judicial y de mane-

ra legal; la activación de los programas de Fonapaz y Fonatierra, aunque limitadas para resolver problemas de refugiados, desplazados y retornados; el manejo legal de los distintos casos de asentamientos de desplazados; la promesa de facilitar los trámites de asociación civil y sindical cuya gestión en el pasado constituía un virtual atentado a la libertad de asociación; no obstante, la Comisión ha recibido denuncias que contradicen su efectiva aplicación. Igualmente (COPREDEH) anunció a la Comisión que ha elaborado y propuesto a las autoridades un plan para el mejoramiento de la vigencia de los derechos humanos.

Estas medidas constituyen solo el inicio de la asunción de responsabilidad que el Estado tiene frente a la comunidad nacional e internacional. Esta responsabilidad demanda una toma de posición clara respecto de los graves problemas que afectan la plena vigencia de los derechos humanos, la fijación de objetivos perfectamente definidos, la programación de políticas tendientes a su consecución y la observancia de todos los organismos del Gobierno, sin distinción alguna, de las directivas que a tal efecto se impartan.

La CIDH ve con seria preocupación la existencia de alrededor de medio millón de personas organizadas militarmente en las PACs (o Comités de Autodefensa Civil), con capacidad de acción armada sin el control efectivo del Estado. Ello es fuente de continuas fricciones y violaciones de derechos humanos en las áreas del país donde éstas operan. Más aún, la Comisión considera necesaria su disolución o su transformación sujetas al marco normativo propio de una sociedad democrática. La experiencia de otros países muestra que, cuando se superan las situaciones de insurgencia que dieron lugar a la creación de ese tipo de organizaciones, las mismas pueden convertirse en un grave obstáculo a la paz interna al ser factores de caos e ilegalidad. Existen casos en que las PACs se han tornado ingobernables y desobedecen abiertamente las órdenes judiciales y policiales, estableciendo su propia justicia, mientras los responsables de su control se abstienen de desautorizarlas, desarmarlas y ponerlas a disposición del juez competente.

La Comisión continúa preocupada por el papel preponderante que desempeña personal militar en sectores claves del gobierno civil. Se requiere una clara separación entre los poderes civiles y militar, y la subordinación inequívoca de los militares al gobierno civil.

La Comisión ha recibido denuncias sobre la existencia de prisioneros clandestinos. Las evidencias recibidas por la Comisión le permiten afirmar que, efectivamente, ha habido casos de detenidos que no han sido tratados de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional y en los compromisos internacionales asumidos por Guatemala. La Comisión debe señalar

que todas las personas detenidas bajo la acusación de cometer delitos deben ser puestos a disposición de los tribunales de justicia competentes. Los gobiernos pueden protegerse ante amenazas a su seguridad, pero deben hacerlo de manera consecuente con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Desea también señalar la Comisión que ha recibido denuncias que indican que en los últimos meses y pese a las declaraciones y esfuerzos del Gobierno, han sucedido casos de detenciones arbitrarias, privación ilegítima de la libertad, que incluyen aislamiento, torturas, así como ejecuciones extrajudiciales. Según testimonios y evidencias obtenidos por la Comisión, dichos actos criminales parecen ser obra de agentes del Estado. Las indudables tensiones que existen en la sociedad guatemalteca, y que la Comisión analiza en su capítulo sobre derechos socioeconómicos y culturales del Cuarto Informe, hacen que estos ataques individuales generen un nuevo temor social e impidan la pacífica solución de conflictos propios de toda sociedad. Es obligación del Estado garantizar la más seria investigación y procesamiento de dichos casos, y la toma de medidas necesarias para evitar que tales hechos se sigan produciendo. La Comisión espera que los casos que se encuentran en trámite e investigación sean esclarecidos y se impongan las sanciones a los responsables.

El reclutamiento militar arbitrario y discriminatorio de jóvenes es otro de los asuntos que preocupan a la Comisión. Se ha tomado conocimiento que este problema se agudiza en áreas rurales.

La existencia de cuerpos de Policía Nacional, o locales, debidamente integrados, equipados y remunerados, es condición indispensable para la seguridad pública y para la garantía que debe proveer el Estado a sus ciudadanos. La anunciada autonomía y control civil de la Policía Nacional y los programas de creación de policías municipales, deben ser reforzados con la reasignación de los correspondientes recursos presupuestarios.

Durante su visita, la Comisión tomó contacto con representantes de las Comunidades de Población en Resistencia y recibió abundante información sobre las mismas. En su Cuarto Informe, la Comisión coincide con lo señalado por autoridades y expertos nacionales e internacionales en el sentido de que las CPR son poblaciones civiles; pero, no obstante, son hostigadas por las Fuerzas Armadas, Patrullas Civiles, y por autoridades de comunidades cercanas. La evidencia recogida en este viaje corrobora el criterio de la CIDH. La Comisión ha visto con satisfacción la pacífica marcha de los habitantes de las CPRs a la capital y la audiencia que les concedieran las autoridades para oír sus peticiones, así como el acompañamiento que les brindó la Procuraduría de los Derechos Humanos. La Comisión ha recibido,

por otra parte, seguridades de todas las autoridades que los derechos de propiedad y de comercio de dichos habitantes serán respetados escrupulosamente y que están dispuestas a garantizar el respeto por el resto de la población.

Recuerda igualmente la Comisión que el derecho que legítimamente tiene el Estado de enfrentar y luchar contra la subversión debe realizarse respetando siempre a la población civil, sus bienes y su dignidad. La observancia de las normas del derecho humanitario es condición necesaria para el respeto a la acción del Estado por parte de la comunidad internacional. La aplicación del derecho humanitario no implica modificar el estatuto jurídico actual de los grupos armados irregulares y obliga a éstos a observar sus disposiciones para proteger a la población civil. La Comisión, por otra parte, señala que la Convención Americana no permite a personas o grupos, suprimir o limitar el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ella.

La Comisión ha comprobado igualmente que algunas Comunidades de Población en Resistencia se ven impedidas de ocupar tierras de su propiedad debidamente tituladas. La CIDH considera que el respeto al derecho de propiedad de las mismas y al de comerciar y a desarrollar toda actividad lícita facilitaría su reinserción completa y pacífica en la sociedad guatemalteca, y el goce de sus derechos fundamentales.

A la luz de lo sucedido en los últimos treinta años en Guatemala, la Comisión recomienda que el Estado dé satisfacción adecuada a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.

Desde principios de este año han retornado al país aproximadamente diez mil refugiados, sea en forma colectiva o individual, con la supervisión y ayuda de varias instituciones nacionales e internacionales. La Comisión cree que este hecho es alentador: asimismo, desea reconocer el esfuerzo que vienen realizando varias agencias estatales para atender las necesidades más urgentes de estas personas, a pesar de la escasez de recursos disponibles para ese propósito. Sin embargo, algunos retornados han informado a la CIDH que han sido objeto de intimidaciones en las áreas en las que han sido reintegrados. La Comisión considera que es muy importante que el Estado guatemalteco siga tomando las medidas necesarias a fin de facilitar el retorno y reincorporación de estos ciudadanos, particularmente en cuanto a la asignación de tierras idóneas y créditos financieros que les permitan su subsistencia y una vida digna.

Quiere señalar la CIDH que, desde su creación, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala ha sido una salvaguardia para los

derechos de los guatemaltecos. Su actual organización autónoma y competencia se han mostrado eficaces para resistir los ataques en los momentos menos propicios a la vigencia de los derechos humanos, por lo que la Comisión espera que a este órgano se le mantengan inalteradas sus funciones y competencia.

La Comisión desea reiterar al Gobierno de Guatemala su voluntad de cooperar en la consolidación del pleno respeto a los derechos fundamentales en el país. La CIDH debe reiterar, asimismo, su convencimiento de que el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales debe ser un aspecto central de las políticas gubernamentales, ya que constituyen un factor esencial en el desarrollo pleno de la democracia.

De igual manera, la Comisión está plenamente convencida de que la paz es la piedra angular para el pleno disfrute de todos los derechos humanos de la población guatemalteca.

La Comisión desea reconocer las facilidades que le brindó el Gobierno para el cumplimiento de su misión y agradece a las autoridades, a las personas que contribuyeron con sus valiosos testimonios y a las distintas instituciones representativas de la sociedad guatemalteca entrevistadas, la cooperación, facilidades y hospitalidad que le brindaron.

Ciudad de Guatemala, 10 de septiembre de 1993

No. 19/93

The Inter-American Commission on Human Rights resolutely condemns the acts of violence committed by irregular armed groups operating with impunity in Haiti. These groups are selectively assassinating people who support the return of President Jean-Bertrand Aristide and are using vandalism in an attempt to prevent Prime Minister Robert Malval's cabinet from taking office and operating.

The Commission deplores the repression carried out by agents of the Armed Forces in Haiti, known as "attachés", which has resurged since early September, and condemns the recent assassination of citizens of Haiti. According to information obtained by the IACHR, 12 people were killed in Canape Vert, Delmás, Musseau, Carrefour and Carrefour Feuille, on the outskirts of Port-au-Prince.

In addition, the Committee was informed of the assassination of Mr. Antoine Izmary, a personal friend of Presidente Aristide and founder of

KOMEVEB, or "Comité Manos Juntas para el Estallido de la Verdad" (the Communal Committee for Revelation of the Truth), which supports a return to democracy. The assassination of Mr. Izmerly was perpetrated on September 11, 1993 by armed civilians who forced him to leave the Sacred Heart Church in Turgeau, where a mass was being said to commemorate the victims of the massacre in the church of San Juan Bosco on September 11, 1988.

The Commission expresses its concern at the threats made against Mr. Dante Caputo, the special envoy of the OAS/UN and interprets them as yet another attempt to destabilize the process of political negotiations in Haiti.

During its on site visit to Haiti, from August 23 to August 27, 1993, the Delegation of the IACHR was told by General Raoul Cédras, Commander in Chief of the Armed Forces, that he would guarantee a climate of peace for the return of President Aristide. However, the resurgence of human rights violations in Haiti, and the passive role adopted by the Army and the Police in response to them, constitute a clear violation of the agreements reached in July 1993, on Governors Island and in the New York Pact.

The Commission calls upon the Armed Forces of Haiti to disarm and dismantle the armed civilian groups whose actions tend to frustrate the full restoration of democracy and of individual guarantees enshrined in the American Convention of Human Rights.

During its next session (October 5-15-1993), the Commission will once again review the human rights situation in Haiti, and the possibility of sending a Delegation before the end of October.

September 24, 1993

No. 20/93

The Inter-American Commission on Human Rights is gravely concerned at the deterioration of the human rights situation in Haiti. Paramilitary groups known as "attachés" have killed dozens of persons in the Canape Vert, Delmas, Musseau, and Carrefour districts, where many supporters of President Jean-Bertrand Aristide live.

Added to such alarming acts as the recent assassination of Mr. Antoine Izmerly are the present violence and terrorism of those armed paramilitary groups, acting with complete impunity under armed forces protection. The

latest tragic victim of this terrorism has been Minister of Justice Guy Malary, who was assassinated along with two of his bodyguards yesterday.

Since September, after Prime Minister Robert Malval was confirmed and after the embargo imposed by the United Nations and the Organization of American States was lifted, acts of violence have increased presumably aiming at preventing the new government from being installed and going into operation and blocking implementation of the agreements. A number of ministers of the new government have had to abandon their homes after receiving death threats. Some newly appointed officials are in hiding and have been unable to take charge of their offices.

Recently, groups of armed forces civilian auxiliaries took over the mass media, broadcasting threats against the United Nations Mission to Haiti (MINUHA) and demanding expulsion of Special Envoy Dante Caputo and resignation of Prime Minister Malval.

The Commission has been informed of the violent demonstrations organized by the Haitian Front for Advancement and Progress (the FRAPH) and other paramilitary groups, designed to prevent the landing of the technical assistance mission for training the armed forces and the police, and to block access to the Port-au-Prince docks by OAS-UN observers and U.S. Embassy staff. During these demonstrations, acts of violence have been committed against journalists and diplomatic vehicles, and demonstrators have fired weapons into the air to frighten the people. These demonstrations have been protected and aided by the police, which even redirected traffic flows with the obvious intent of facilitating the demonstrators' passage.

The Commission strongly condemns the situation of violence prevailing in Haiti, which it perceives as provocation designed to prevent compliance with the Governors Island agreements concluded in July 1993 and the New York Accord that lifted the international embargo on August 27, 1993. The Haitian armed forces' failure to comply with those agreements has led the United Nations Security Council to reimpose the embargo.

The Commission considers that, although implementation of these agreements is being threatened by the violence and repression of the armed forces, it affirms that the agreements continue to be in effect for the international community, which can take whatever measures may be needed against the groups that are hampering full reestablishment of democracy and the individual guarantees protected by the American Convention on Human Rights.

No. 21/93

El día de hoy 15 de octubre de 1993 concluyó el 84° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que participaron su Presidente doctor Oscar Luján Fappiano, el Primer Vicepresidente, Profesor Michael Reisman, el Segundo Vicepresidente, Embajador Alvaro Tirado Mejía, y los miembros Embajador Oliver Jackman y doctores Marco Tulio Bruni Celli, Leo Valladares Lanza y Patrick Robinson.

Durante este período de sesiones, la Comisión recibió en audiencia a representantes de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales y de personas individuales interesadas en el tema de los derechos humanos. Se escucharon testimonios en relación con la situación general de los derechos fundamentales en diferentes Estados, y con referencia a casos individuales, actualmente en trámite en la Comisión.

En relación con El Salvador la Comisión recibió en audiencia al señor Ministro de Relaciones Exteriores de ese Estado miembro, quien concurrió acompañado por el Fiscal General de la República, el Comisionado Principal para Derechos Humanos de ese país, el Director de Política Exterior de la Cancillería Salvadoreña y el Representante Permanente de El Salvador ante la Organización, quienes se refirieron a la situación de los derechos humanos en El Salvador en el período que se inició con posterioridad a la firma de los Acuerdos de Paz. Los funcionarios salvadoreños manifestaron que el Gobierno de El Salvador desea que la CIDH realice la visita, *in loco*, que fue postergada en el mes de abril del corriente año. La CIDH ha seguido con el mayor interés la evolución de la situación de los derechos humanos en El Salvador y acogió con satisfacción esa nueva invitación; acordó que oportunamente fijará la fecha y aprobará el programa que cumplirá durante esa visita de observación.

La Comisión aprobó un Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de su Reglamento, acordó remitirlo al Gobierno para que formule las observaciones que pudiese tener.

La Comisión consideró el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, preparado con motivo de las visitas de observación, *in loco*, realizadas en diciembre de 1990 y en mayo de 1992, que con anterioridad había sido enviado al Gobierno colombiano para que tuviese la oportunidad de formular las observaciones que considerase pertinentes. La CIDH, después de tomar nota de las observaciones del Gobierno colombiano, acordó publicarlo.

Se aprobó, asimismo, un Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú y se acordó su publicación. La Comisión expresa su profunda preocupación por la inclusión, en el artículo 140 de la nueva Constitución aprobada por el Congreso Constituyente Democrático del Perú, de una norma mediante la cual se amplían los casos de aplicación de la pena de muerte, en expresa contradicción con lo previsto en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CIDH consideró la situación de los indios Yanomamis, quienes han sido objeto de ataques continuos por grupos de buscadores de oro. Consideró, asimismo, el caso de la masacre de los prisioneros de la casa de detención de Sao Paulo, a raíz de la cual 111 internos fueron asesinados por guardias de la prisión, y acordó solicitar información al Gobierno del Brasil sobre los asesinatos sistemáticos de los niños de la calle, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la información recibida, 650 niños habrían sido asesinados solo en el año 1992. La Comisión acordó solicitar al Gobierno del Brasil la anuencia correspondiente para efectuar una visita, *in loco*, a ese Estado miembro.

La Comisión recibió en audiencia al Representante Permanente de Nicaragua, Embajador José Antonio Tijerino, quien se refirió a la situación general de los derechos humanos en ese país.

La CIDH también recibió en audiencia al Representante Permanente del Gobierno Constitucional de Haití, Embajador Jean Casimir. La Comisión deplora la violencia que existe en Haití y considera que la misma constituye un acto evidente de provocación, con el propósito de impedir el cumplimiento de los acuerdos suscritos el 3 de julio del corriente año en la Isla del Gobernador, en la ciudad de Nueva York. En opinión de la Comisión, estos actos de vandalismo y violencia están dirigidos a confundir a la población y a impedir el restablecimiento de la democracia y de las garantías individuales que prevé la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dada la situación de gravedad que impera en Haití, la Comisión emitió un comunicado de prensa al respecto.

Durante ese período de sesiones, la Comisión consideró con preocupación la situación negativa de los derechos humanos que se registra en Cuba, debido principalmente a las numerosas restricciones a que son sometidas las personas que, de alguna manera, discrepan con el régimen político imperante en el país. Una vez más, la CIDH hace un llamado al Gobierno cubano a fin de que permita una auténtica libertad de expresión y el pleno restablecimiento del Estado de Derecho.

La situación de los derechos humanos en Guatemala fue también motivo de atención por parte de la Comisión. Se analizó la información obtenida durante la visita, *in loco*, que se realizó en el mes de septiembre del

presente año y tomó conocimiento de la *Declaración sobre Derechos Humanos* emitida por el Gobierno de Guatemala el 4 de octubre de 1993.

La Comisión continuó la consideración de algunos de los aspectos que se incluirían en el proyecto de instrumento jurídico interamericano sobre los derechos de las poblaciones indígenas. Con referencia a este asunto se tomó nota de la respuesta del Gobierno de Brasil sobre los derechos que debería incluir dicho instrumento, así como de la reciente sanción de una ley sobre los derechos de las comunidades aborígenes por parte del Gobierno de Chile.

En cumplimiento de recomendaciones de la Asamblea General, la Comisión continuó con el análisis sobre la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos del menor en el hemisferio. La Comisión ha iniciado, además, el análisis de las repercusiones que podrían tener los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en el proceso de desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano.

La Comisión dispuso, asimismo, elaborar un programa de actividades para la promoción y difusión de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA.

La Comisión acordó dirigirse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a efecto de solicitarle que adopte medidas cautelares para que los hijos del matrimonio de Juan Enrique Reggiardo y María Rosa Ana Tolosa, desaparecidos durante el régimen militar que se instaló en Argentina a partir de 1976, sean puestos en guarda provisoria en un hogar sustituto y sometidos a un adecuado tratamiento psicológico, hasta tanto se resuelva la entrega de los menores a su familia legítima.

La Comisión acordó asimismo solicitar a la Corte Interamericana una Opinión Consultiva sobre lo siguiente:

- Cuando un Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos dicta una ley manifiestamente violatoria de sus obligaciones según esa Convención, ¿cuáles son los efectos jurídicos de esa ley en términos de las obligaciones internacionales de ese Estado?

- Cuando un Estado Parte en la Convención dicta una ley que manifiestamente autoriza y/o exige a sus agentes o funcionarios violar la Convención, ¿cuáles son las obligaciones y responsabilidades de dichos agentes o funcionarios?

Finalmente, la Comisión decidió celebrar su próximo período ordinario de sesiones del 31 de enero al 11 de febrero de 1994.

Washington, D.C., 15 de octubre de 1993